



## I

La consulta solicita el parecer de esta Agencia Española de Protección de Datos sobre “las posibilidades legales de actuación” posibles en relación con las solicitudes de acceso a información planteadas ante el Departamento consultante por las asociaciones que representan los intereses de los afectados por la llamada Causa de Niños Robados.

Según se indica, la consulta se funda en las manifestaciones llevadas a cabo por las mencionadas asociaciones en que las mismas ponen de relieve “que se han encontrado con dificultades insalvables en la legislación vigente en materia de protección de datos” para acceder a informaciones obrantes en distintos ficheros públicos y privados, que pretenden emplearse para la efectiva investigación de las circunstancias de las personas afectadas por la mencionada Causa, indicándose que dichas asociaciones “quieren dejar al margen la línea de investigación judicial o fiscal”.

La consulta se refiere a una pluralidad de supuestos de acceso a informaciones de distinta naturaleza, reproduciendo literalmente las demandas de las asociaciones, que solicitan que “se proceda a la apertura de archivos”, “dado que el Estado está exento del incumplimiento sobre la Ley de Protección de Datos”.

A tal efecto, de los escasamente claros términos de la solicitud dirigida al Departamento y del contenido del propio escrito por el que se solicita el presente informe parece derivarse que por las mencionadas asociaciones se solicita el acceso a los datos de nacimientos y defunciones obrantes en el Registro Civil, para la realización de lo que se denomina una “comparativa en las anotaciones de los libros de fallecidos respecto a las anotaciones de los libros de nacidos”. Asimismo, se solicita el acceso a los archivos de centros sanitarios públicos y privados, diputaciones provinciales y casas cuna, así como a los Libros de Bautismo de la Iglesia Católica y, finalmente a la Base de Datos de perfiles de ADN de que dispone el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su cotejo con pruebas realizadas en clínicas privadas.

## II

Como cuestión previa al estudio de las cuestiones planteadas, es preciso indicar que el análisis de las mismas desde la perspectiva de la



aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre podrá, en determinados casos, no ofrecer una respuesta definitiva sobre la cuestión, habida cuenta de lo genérico de los términos en que la misma ha sido planteada.

Del mismo modo, sería necesario efectuar ciertas precisiones previas relacionadas con el modo en que los accesos y cotejos planteados aparecen vinculados y sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

En primer lugar, y con carácter general, es preciso indicar que en determinados supuestos el acceso que se plantea se refiere a datos de fallecimientos (alegados como, en ocasiones, ficticios por parte de las asociaciones) o guardarán relación con personas que ya habrían fallecido en el momento de llevarse a cabo la consulta.

Sentada esta premisa, debe recordarse que en relación con la aplicabilidad de las normas de protección de datos a las personas fallecidas, el primer inciso del artículo 2.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone, en su primer inciso, que “este Reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas”.

Dicho precepto no hace sino poner de manifiesto lo que ya ha venido indicándose por la Agencia Española de Protección de Datos, que en diversos informes y resoluciones ya se había manifestado en el sentido de considerar excluidos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 los datos referidos a quienes hubieran fallecido.

Así, la Agencia ha analizado si la muerte de las personas da lugar a la extinción del derecho a la protección de datos, ya que el artículo 32 del Código Civil dispone que “la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”, lo que determinaría, en principio, la extinción con la muerte de los derechos inherentes a la personalidad.

En este sentido, se ha indicado en informe de 23 de mayo de 2003, a la luz de lo señalado en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que “si el derecho fundamental a la protección de datos ha de ser considerado como el derecho del individuo a decidir sobre la posibilidad de que un tercero pueda conocer y tratar la información que le es propia, lo que se traduce en la prestación de su consentimiento al tratamiento, en el deber de ser informado y en el ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es evidente que dicho derecho desaparece por la muerte de las personas, por lo que los tratamientos de datos de personas fallecidas no podrían considerarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999”.



Igualmente, diversas resoluciones de la Agencia se han hecho eco de esta postura. Así, en la resolución de 23 de mayo de 2006, recaída en el procedimiento E/779/2005 se reproduce la motivación que acaba de señalarse. Igualmente, en resolución de 12 de junio de 2007, dictada en el expediente E/344/2006, se señala que “la LOPD tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, según dispone el artículo 1. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 del Código Civil, que dispone que la personalidad civil referente a las personas físicas se extingue con el fallecimiento, procede el archivo de las presentes actuaciones toda vez que el derecho reclamado queda al margen del ámbito de aplicación de la LOPD, ante la inexistencia de sujeto de derecho”.

En consecuencia, las personas fallecidas no son titulares del derecho a la protección de datos de carácter personal, por lo que las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 no son de aplicación a sus datos. Por este motivo, debe señalarse que las limitaciones al acceso a las informaciones relacionadas con personas fallecidas no provendrían de la aplicación de las normas de protección de datos de carácter personal, sin perjuicio de que en determinados supuestos exista una normativa específica aplicable a la información cuyo acceso se pretende que pudiera limitar el mencionado acceso.

### III

Una segunda precisión que necesariamente ha de efectuarse en el presente informe guarda relación con la afirmación que parece contenerse en el documento remitido por las asociaciones al Departamento, del que parece inferirse que la legislación de protección de datos no afecta a la Administración General del Estado, dado que se señala en el texto que “el Estado está exento del incumplimiento sobre la ley de protección de datos”.

Frente a dicha afirmación debe aclararse expresamente que la legislación de protección de datos afecta a la totalidad de tratamientos automatizados de datos de carácter personal así como a los ficheros no automatizados, de los que sean responsables tanto las Administraciones Públicas como las entidades de derecho privado, sin que quepa efectuar ningún tipo de excepción genérica como la manifestada por las asociaciones en su escrito.

En este sentido, las exclusiones de la aplicación de la Ley Orgánica aparecen expresamente recogidas en el artículo 2.2 de dicha norma, según el



cual “el régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente Ley Orgánica no será de aplicación:

- a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
- b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
- c) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos”.

De este modo, dado que el citado precepto no establece ninguna exclusión genérica, como parece indicarse en el escrito dirigido por las asociaciones al Ministerio de Justicia, no es posible entender la afirmación que el mismo contiene en el sentido de que no se precisarían para el acceso a la información planteada los requisitos establecidos en las normas de protección de datos por no existir un sometimiento de las Administración a las previsiones de dicha Ley.

A mayor abundamiento, y a fin de clarificar definitivamente la cuestión, debe recordarse que el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 7 de su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, señala terminantemente que “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, **sea el Estado o un particular**, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso”.

En consecuencia, el acceso a la información solicitada deberá resultar conforme a lo dispuesto en las normas de protección de datos de carácter personal, sin que quepa considerar que por el mero hecho de que la información se recabase por la Administración General del Estado sería posible establecer una excepción general a las reglas que rigen el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

#### IV

Hechas estas consideraciones preliminares, conviene efectuar una precisión adicional relacionada con la aplicación de las normas de protección



de datos de carácter personal, referida a uno de los supuestos respecto de los que se solicita por las asociaciones el acceso a la información, cual es la información contenida en los Libros de Bautismos de la Iglesia Católica.

La cuestión del sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de los mencionados Libros fue objeto de un examen reiterado por parte de esta Agencia Española de Protección de Datos en numerosas resoluciones relacionadas con solicitudes de cancelación por los particulares de sus datos de carácter personal obrantes en los citados Libros. En dichas resoluciones, la Agencia consideraba procedente proceder no al borrado de la información, sino a la constancia en los Libros por medio de nota marginal del hecho de que el interesado había ejercitado el derecho de cancelación. Estas resoluciones, inicialmente confirmadas por la doctrina de la Audiencia Nacional, fueron finalmente revocadas por el Tribunal Supremo, esencialmente a partir de sus sentencias de 19 de septiembre y 14 de octubre de 2008, reiteradas por numerosas sentencias más.

En particular, la segunda de las sentencias citadas señala que “como hemos declarado en la antes citada sentencia de 19 de septiembre de 2008, el registro de bautismo parroquial no contiene ningún criterio, apriorísticamente definido por una persona entendida como responsable del fichero, que permita hablar de una estructuración conforme a criterios específicos relativos a las personas, toda vez que el asiento se practica por la fecha de bautismo, o incluso en la fecha en que se toma constancia del mismo, lo que impide ciertamente el fácil acceso al dato, dado que ello exige conocer la parroquia en que el mismo se celebró y, por tanto, se inscribió y la fecha en que el bautizo o su anotación se practicó por el párroco”, y añade posteriormente:

*“Y a tal efecto, ha de tenerse en cuenta que, conforme al canon 230 del Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983, cabe incluso la administración del bautismo por laicos, sin perjuicio de que, de conformidad con el canon 530, ordinariamente dicha función corresponde al párroco, si bien el canon 857 permite la administración del bautismo en una iglesia u oratorio, que no necesariamente debe de coincidir con la iglesia parroquial propia, entendida ésta como la de los padres, ya que conforme a dicho canon puede existir causa justa que aconseje otra cosa, según ratifica el canon 859, llegando a permitir el 860 la administración, en caso de necesidad, en casas particulares, y, con autorización del Obispo diocesano, incluso en hospitales, lo que podrá realizarse, en caso de concurrir caso de necesidad o cuando lo exija otra razón pastoral.*

*Lo anterior demuestra indudablemente las dificultades que pueden presentarse para obtener información sobre el bautismo que, por otro lado, está limitado a la solicitud del propio afectado, como se deduce del Ap. 1 del canon 535 del Código de Derecho Canónico, y sin que la posibilidad de que los datos de dichos libros sean utilizados con fines*



*históricos o científicos suponga una vulneración de la Ley Orgánica 15/1999 ni de la Directiva 46/1995, en cuyo desarrollo se dicta, pues a dicha posibilidad se refiere la propia Directiva en su considerando 29 y 40, permitiendo ese uso con las garantías adecuadas establecidas por cada Estado. En el mismo sentido el artículo 9 del Real Decreto 1720/2007 permite el tratamiento de los datos de carácter personal con fines históricos, estadísticos o científicos.*

*Por otro lado, los datos conservados en el libro de bautismo no hacen sino reflejar el hecho histórico de la realización de dicho bautismo en una fecha determinada y con respecto a una persona identificada, con los demás requisitos previstos en el Código de Derecho Canónico, en ningún caso como hemos dicho anteriormente, se configuran los libros de bautismo como una relación de católicos o personas pertenecientes a la religión católica y mucho menos como un fichero o relación actualizada de aquéllos por lo que carece de objeto pretender actuar sobre tales libros a efectos de hacer constar el abandono de la religión católica con el único objeto de actualizar una relación de miembros de dicha religión que no es tal. La declaración de apostasía por parte del interesado no altera la circunstancia de que aquel hecho del bautismo se produjo y el dato referido al mismo es exacto, afectando dicha apostasía exclusivamente, en cuanto supone el rechazo total de la fe cristiana conforme al canon 751, a los derechos del interesado, sin que esté prevista la práctica de anotación de la misma en el libro de bautismo o registro en cualquier otra forma en libros parroquiales.*

*En definitiva, ni los libros parroquiales de bautismo pueden entenderse constitutivos de un fichero, en el sentido que regula Ley Orgánica 15/99, ni el dato que en los mismos se refleja, es inexacto, o no puesto al día o incompleto. Así lo entendió, en definitiva, la Agencia Española de Protección de Datos que en la resolución recurrida, incluso, no acuerda la rectificación del libro de bautismo como pedía el interesado, sino que dispone una simple anotación en la partida de bautismo y no en el libro, lo que no resulta correcto en cuanto que la certificación del contenido del libro que reflejaría dicha partida no se acomoda a los datos del libro parroquial, resultando, por ello, improcedente.”*

Consecuencia de todo ello es que habiendo declarado el Tribunal Supremo que los Libros de Bautismo no constituyen ficheros a los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 y no constando la existencia de tratamiento automatizado de las informaciones contenidas en los citados Libros, las normas de protección de datos de carácter personal no les son de aplicación. Por ello, la posibilidad o no de acceso a los datos contenidos en dichos Libros quedará sometida a la normativa específica que les sea de aplicación y en particular al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979 y al Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983, sin que sea procedente que esta Agencia se



pronuncia sobre la conformidad o no con las normas de protección de datos en relación con dicho acceso.

## V

Acotados ya los términos a los que deberá referirse el presente informe, los accesos solicitados implican a su vez el acceso a datos de carácter personal sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, siendo preciso diferenciar los supuestos en que la información cuyo acceso se pretende se refiere directamente al interesado que la solicita o en cuyo nombre se solicita el acceso de aquéllos en que la información se refiere a un tercero distinto del mismo.

En el primero de los supuestos, la transmisión al interesado de los datos a él mismo referidos sería siempre posible como consecuencia del ejercicio por aquél del derecho de acceso reconocido por el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo apartado 1 dispone que “el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos”.

Para el adecuado ejercicio de este derecho, debe recordarse que el mismo debería llevarse a cabo por el propio interesado o, en caso de hacerse por medio de un representante voluntario, como podrían serlo las asociaciones, el artículo 23.2 c) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica dispone que “los derechos también podrán ejercitarse a través de representante voluntario, expresamente designado para el ejercicio del derecho. En ese caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y la representación conferida por aquél”.

Por otra parte, debe tenerse particularmente en cuenta en este caso lo establecido en el artículo 25.8 del Reglamento, según el cual “cuando las leyes aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas”.

Así, por ejemplo, para el acceso a los datos del Registro Civil sería preciso atender al régimen de publicidad establecido en el artículo 15.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, según el cual “los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su registro individual”.

Por otra parte, en lo relacionado con el acceso a los datos de las historias clínicas, el artículo 18.1 de la Ley 41/2001, de 14 de noviembre, dispone que “El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia

clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos”, aclarando el apartado 3 del citado artículo 18 que “el derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas”.

## VI

En los restantes supuestos a los que se aludió en el apartado anterior de este informe; es decir, cuando se pretenda el acceso a informaciones de terceros y no del propio interesado que accede directamente o en cuyo nombre se accede a la información, nos encontraremos ante un supuesto de cesión o comunicación de datos de carácter personal, definido por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

El régimen general de las cesiones de datos se contempla en el artículo 11 de la Ley Orgánica, que establece en sus dos primeros apartados lo siguiente:

*“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.*

*2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:*

*a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.*

*b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.*

*c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.*

*d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga*





*como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.*

*e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.*

*f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”*

A su vez, este régimen debe completarse con lo derivado de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011, por la que se resuelven las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo en el seno de los recursos interpuestos contra el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, así como de lo señalado en las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2012, por la que se resuelven definitivamente los citados recursos.

La primera de dichas sentencias, declara el efecto directo de lo dispuesto en el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual “los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si (...) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva”. De este modo, la causa de legitimación prevista en ese precepto deberá añadirse a los supuestos legitimadores del tratamiento que se han indicado con anterioridad.

Por su parte, las Sentencias del Tribunal Supremo a las que se ha hecho referencia, como consecuencia de lo señalado por la sentencia del Tribunal de Justicia también citada declaran nulo lo dispuesto en el artículo 10.2 b) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que disponía que “será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando (...) los datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

Debe considerarse que como consecuencia de esta declaración de nulidad y de lo señalado en la propia Sentencia del Tribunal de Justicia, en



cuya parte dispositiva se indica que “el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para permitir el tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste, sino además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo así de forma categórica y generalizada todo tratamiento de datos que no figuren en tales fuentes”, amén de reconocerse expresamente el efecto directo del artículo 7 f) de la Directiva, el artículo 11.2 b) de la Ley Orgánica 15/1999 ha sido desplazado del ordenamiento jurídico, de modo que el hecho de que los datos se encuentren incorporados a fuentes accesibles al público no podrá considerarse pos sí solo como causa legitimadora del tratamiento, sino como un criterio que permitirá llevar a cabo la ponderación de derechos e intereses a la que se refiere el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE.

Por otra parte, el régimen descrito es el generalmente aplicable, si bien no lo será en relación con los denominados datos especialmente protegidos, de los que a efectos de la consulta planteada resultan especialmente relevantes los relacionados con la salud de los afectados.

En este sentido, el artículo 5.1 g) del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 define como datos de carácter personal relacionados con la salud “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”, añadiendo que “en particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética”.

Pues bien, en relación con estos datos no operan las reglas establecidas en el citado artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, sino las previstas en el artículo 7, cuyo apartado 3 dispone que “los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”. Esta regla sólo se ve afectada por las previsiones de los artículos 7.6 y 8 de la Ley, que no se referirían a supuestos de acceso como los ahora analizados.

En resumidas cuentas, para que la cesión que constituye la transmisión de la información a los solicitantes o sus asociaciones representativas pueda tener lugar, y sin perjuicio de lo ya indicado con anterioridad en relación con la no aplicación de las normas de protección de datos a las personas fallecidas, será en principio preciso que concurra alguna de las siguientes circunstancias:



- Si se tratase de datos relacionados con la salud, como los que constan en las historias clínicas o los que se deriven de las bases de datos de perfiles de ADN, sería preciso contar con el consentimiento del interesado al que se refieran los datos o que la cesión se encontrase amparada en una norma con rango de Ley.
- En los restantes supuestos, será posible la cesión de los datos cuando la misma se encuentre amparada en el consentimiento del interesado o en los apartados a) y c) a f) del artículo 11.2 de la Ley Orgánica o, efectuada la ponderación a la que se refiere el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE quepa concluir que el interés legítimo del solicitante ha de prevalecer sobre los derechos del afectado y, en particular sobre su derecho a la protección de datos de carácter personal.

## VII

Teniendo en cuenta las consideraciones que han venido efectuándose hasta este lugar procedería ahora hacer referencia a los supuestos planteados por las asociaciones, debiendo nuevamente reiterar que en determinados supuestos, habida cuenta de su generalidad, no será posible otorgar una respuesta terminante en relación con las solicitudes de acceso planteadas.

Dicho lo anterior, la primera cuestión que parece derivarse de la información aportada se referiría al posible acceso por las asociaciones o por los propios afectados al contenido de los datos de nacimientos y defunciones en el Registro Civil, si bien en la consulta se hace referencia a otros datos, tales como los referidos a adopciones.

Como punto de partida, debe indicarse que en relación con el Registro Civil el artículo 2.3 d) de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que dicho registro se regirá por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por la propia Ley Orgánica, habiendo entendido el Dictamen del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2007, emitido en relación con el entonces Proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, que de dicha previsión se deriva que las normas generales de protección de datos serán de aplicación supletoria a los ficheros y tratamientos a los que se refiere el artículo 2.3, entre los que como se ha dicho se encuentra el Registro Civil.

Dicho lo anterior, en el presente supuesto, la determinación de la existencia o inexistencia de causa legitimadora de la cesión de los datos deberá llevarse a cabo necesariamente a la luz de las previsiones contenidas en la legislación reguladora del Registro Civil, debiendo a tal efecto tener en cuenta que la Ley 20/2011, de 21 de julio, prevé en el párrafo primero de su disposición final décima que “la presente Ley entrará en vigor a los tres años de



su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

De este modo, como punto de partida, el artículo 6 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 dispone que “el Registro es público para quienes tengan interés en conocer los asientos, con las excepciones que prevean ésta u otras leyes”, añadiendo en cuanto al modo en que se producirá la publicidad lo siguiente:

*“La publicidad se realiza por manifestación y examen de los libros, previa autorización, tratándose de Registros Municipales, del Juez de Primera Instancia, y por certificación de alguno o de todos los asientos del mismo folio, literal o en extracto o negativa si no los hubiere.*

*Si la certificación no se refiere a todo el folio se hará constar, bajo la responsabilidad del encargado del Registro, que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja o modifique lo inserto, y se lo hay se hará necesariamente relación de ello en la certificación.”*

Por su parte, el artículo 51 establece una prohibición a dicha publicidad, al disponer que “no podrán manifestarse los asientos ni librarse certificación que contenga el dato de una filiación ilegítima o desconocida, sino a las personas a quienes directamente afecte o, con autorización del Juez de Primera Instancia, a quienes justifiquen interés especial”. Esta prohibición se completa con las contenidas en el artículo 21 del Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, cuyo artículo 21 dispone que “no se dará publicidad sin autorización especial:

- 1.º De la filiación adoptiva o desconocida o de circunstancias que descubran tal carácter y del cambio del apellido Expósito u otros análogos o inconvenientes.
- 2.º De la rectificación del sexo.
- 3.º De las causas de privación o suspensión de la patria potestad.
- 4.º De los documentos archivados, en cuanto a los extremos citados en los números anteriores o a circunstancias deshonorosas o que estén incorporados en expediente que tenga carácter reservado.
- 5.º Del legajo de abortos.
- 6º De los cambios de apellido autorizados conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 208 de este Reglamento.



Añade el precepto que “la autorización se concederá por el Juez Encargado y sólo a quienes justifiquen interés legítimo y razón fundada para pedirla. La certificación expresará el nombre del solicitante, los solos efectos para que se libra y la autorización expresa del encargado. Este, en el registro directamente a su cargo, expedirá por sí mismo la certificación”. Fuera de esta autorización, sólo sería posible el acceso a los datos por las personas contempladas en el artículo 22 del Reglamento.

De este marco se desprende que el acceso a los datos del Registro Civil sería posible al amparo de la legislación actualmente vigente, siempre y cuando los datos cuyo acceso pretende no se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 21 que acaba de reproducirse, en cuyo caso habría de obtenerse la correspondiente autorización sobre la base del interés legítimo invocado, limitando asimismo el uso que podría darse a la información obtenida, lo que en principio impediría el cruce de información pretendido.

En este sentido, dado que las solicitudes planteadas podrían referirse a algunas de las informaciones anteriormente indicadas, tales como las relativas a la filiación adoptiva o al legajo de abortos, sería precisa la autorización para cada supuesto concreto de acceso.

Debe, por otra parte, tenerse en cuenta, aunque sea a meros efectos interpretativos, que el artículo 15 de la Ley 20/2011 establece un criterio más estricto de acceso a la información del Registro Civil cuando dicho acceso no se solicite por el propio interesado, por cuanto sus apartados 2 y 3 del citado precepto establecen lo siguiente:

*“2. El Registro Civil es público. Las Administraciones y funcionarios públicos, para el desempeño de sus funciones y bajo su responsabilidad, podrán acceder a los datos contenidos en el Registro Civil.*

*3. También podrá obtenerse información registral, por los medios de publicidad previstos en los artículos 80 y siguientes de la presente Ley, cuando se refieran a persona distinta del solicitante, siempre que conste la identidad del solicitante y exista un interés legítimo.”*

Al propio tiempo, es preciso tener en cuenta que el artículo 83. a) sigue incluyendo como supuesto sometidos a un régimen especial de publicidad los relativos a la filiación adoptiva y la desconocida, indicando el artículo 84 que:

*“Sólo el inscrito o sus representantes legales podrán acceder o autorizar a terceras personas la publicidad de los asientos que contengan datos especialmente protegidos en los términos que reglamentariamente se establezcan.*



*Si el inscrito ha fallecido, la autorización para acceder a los datos especialmente protegidos sólo podrá efectuarla el Juez de Primera Instancia del domicilio del solicitante, siempre que justifique interés legítimo y razón fundada para pedirlo.*

*En el supuesto del párrafo anterior, se presume que ostenta interés legítimo el cónyuge del fallecido, pareja de hecho, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado.”*

De este modo, el régimen, en lo que interesa al supuesto ahora analizado no se encuentra modificado por la nueva normativa reguladora del Registro Civil.

Por otra parte, dado que de la documentación aportada parece desprenderse una solicitud de acceso masivo a la información del Registro Civil para el cotejo de los datos sobre nacimientos y defunciones, es preciso analizar si dicho acceso se encontraría amparado por el régimen de publicidad establecido por la normativa reguladora del citado Registro.

Como ya se ha dicho, el artículo 6 de la vigente Ley del Registro Civil prevé que la publicidad del Registro podrá materializarse por manifestación y examen de los libros o por certificación de sus asientos.

Respecto de la primera modalidad, a su vez, el artículo 18 del Reglamento se limita a indicar que “La manifestación y examen de los libros tendrá lugar a la hora más conveniente para el servicio y bajo la vigilancia del Encargado”, sin aclarar si ésta puede referirse a una pluralidad de asientos.

No obstante, el artículo 19 se refiere al acceso a los libros por parte de las Administraciones Públicas, señalando que las autoridades y funcionarios “pueden conocer, por examen directo, certificación o nota simple informativa, el contenido de cualquier asiento o documento del Registro, salvo los correspondientes al libro de Matrimonios Secretos” y añadiendo que “interesada de oficio, certificación o nota simple, sobre más de un folio registral, el Encargado puede optar por la manifestación de Libros, excepto que otra cosa se imponga por Ley o Decreto o por la Dirección General. En estos últimos casos, podrá comprenderse en una sola certificación el contenido de diferentes folios”.

No obstante no sería a esta Agencia sino a la Dirección General de Registros y del Notariado a la que correspondería pronunciarse sobre el alcance posible de dicho acceso, conforme a las competencias que a la misma otorga la Ley del Registro Civil.

A la vista de todo ello, cabe concluir que el acceso a las informaciones del Registro Civil se encontraría amparado por lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 en conexión con el artículo 6 de la vigente Ley



del Registro Civil, con las excepciones al régimen de publicidad registral previstas en los artículos 21 y 22 del Reglamento de Registro Civil. No obstante, en cuanto a la posibilidad de cotejo masivo de datos del Registro debería ser la Dirección General de los Registros y del Notariado la que resolviese sobre la procedencia de tal acceso, y en particular sobre el que pudiera ser llevado a cabo por las Administraciones Públicas al amparo de lo dispuesto en las normas citadas y en el artículo 19 del Reglamento del Registro Civil.

## VIII

Por otra parte, dado que las asociaciones en su escrito se refieren a la documentación obrante en centros sanitarios públicos y privados, es preciso indicar que en este caso nos encontraríamos, como se indicó anteriormente, ante el acceso a datos relacionados con la salud de las personas, sometidos como ya se indicó a un régimen específico que delimita los supuestos en los que la comunicación de la información podría encontrarse amparada por la Ley Orgánica 15/1999. Estos supuestos ya fueron sistematizados por esta Agencia en su informe de 11 de junio de 2008, en que se indicaba lo siguiente:

*“En consecuencia, la Ley Orgánica 15/1999 viene a establecer una lista tasada de casos en que será posible el tratamiento de los datos relacionados con la salud, quedando el mismo limitado a los supuestos en que:*

- *El interesado haya prestado su consentimiento expreso para ello.*
- *Una norma con rango de Ley así lo prevea, por razones de interés público.*
- *El tratamiento sea necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, con las restricciones previstas en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica, que deberá además ser objeto de una interpretación restrictiva, en los términos ya señalados.*
- *El tratamiento sea necesario para atender una urgencia vital del afectado.*
- *El tratamiento se lleve a cabo en el ámbito de la asistencia sanitaria respecto de los pacientes que acudan a los centros sanitarios, en los términos previstos en la legislación sectorial que resulte de aplicación.*

- *La comunicación de los datos sea precisa para solucionar una urgencia o para realizar los estudios epidemiológicos.”*

Por otra parte, y en relación con la información que formase parte de las historias clínicas de los pacientes, debe tenerse en cuenta lo previsto al efecto en la Ley 14/2002, de 14 de noviembre, cuyos artículos 16 y 18 establecen los supuestos en los que podría ser posible el acceso a la documentación sanitaria por parte de terceros distintos del propio paciente.

En relación con esta cuestión, el artículo 16 de la citada Ley establece lo siguiente:

*“1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia.*

*2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten.*

*3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso.*

*4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.*

*5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o*





*cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.*

*6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto.*

*7. Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.”*

En consecuencia, la Ley limita los supuestos de acceso a la historia clínica a aquéllos que se llevan a cabo en el marco de la protección de la salud del propio paciente por parte de los profesionales sanitarios, limitando incluso el acceso a la misma por quienes desarrollen funciones de gestión de los centros sanitarios.

Esta regla únicamente queda exceptuada en los supuesto contemplados en los apartados 3 y 5 del precepto, respecto de los que debe ahora traerse a colación lo ya analizado por esta Agencia en informe de 31 de marzo de 2008, en el que se concluye que:

*“(…) de los apartados 3 y 5 del artículo 16 de la Ley 41/2002, y siempre previa la ponderación de la proporcionalidad a la que acaba de hacerse referencia, se deduce la existencia de tres supuestos en los que será posible el uso de la historia clínica con fines distintos de los médico-asistenciales, estableciendo la Ley especialidades distintas en cada uno de los supuestos.*

- *Así, en primer lugar, el acceso para “fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia”, deberá someterse a una previa disociación de los datos contenidos en la historia clínica “de manera que como regla general quede asegurado el anonimato”, a menos que el interesado haya prestado su consentimiento para ello, en los términos que impone el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999.*

- *Por otra parte, en caso de que el acceso se solicite por una autoridad judicial y la identificación del paciente sea necesaria para la tramitación del proceso en que los datos se solicitan, se estará a los términos de la correspondiente Resolución judicial, quedando el acceso “limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso”.*

- *Por último, el acceso por parte de los órganos de inspección sanitaria se regula independientemente de los anteriores, limitándose la Ley a reconocer dicho acceso siempre que su finalidad sea la “comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria”.*

Fuera de estos supuestos la Ley 41/2002 únicamente permite el acceso a los datos de la historia clínica de las personas fallecidas por determinados interesados, al disponer el artículo 18.4 que “Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros”.

Es decir, en estos supuestos el acceso se contempla como limitado tanto por la naturaleza de quien solicita la información como por la finalidad que justifica la obtención de la documentación sanitaria.

En consecuencia, respecto de la información contenida en historias clínicas de pacientes respecto de la que se pretendiese el acceso, la cesión de estos datos no parece encajar en los supuestos contemplados en la Ley 41/2002, sin que sea posible en este supuesto, al tratarse de datos relacionados con la salud de las personas, acudir a la regla de ponderación de derechos e intereses establecida en el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE.

De este modo, y atendidos los supuestos analizados, únicamente podría entenderse que existe una cobertura legal en los supuestos en que el acceso se reclamase en “los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente” o cuando el acceso se lleve a cabo por “el personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación” y el acceso tenga lugar “en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria”.

A tal efecto, el artículo 41 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública dispone que:

- 1. Las autoridades sanitarias con el fin de asegurar la mejor tutela de la salud de la población podrán requerir, en los términos establecidos en este artículo, a los servicios y profesionales sanitarios informes, protocolos u otros documentos con fines de información sanitaria.*
- 2. Las Administraciones sanitarias no precisarán obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de datos personales, relacionados con la salud, así como su cesión a otras*



*Administraciones públicas sanitarias, cuando ello sea estrictamente necesario para la tutela de la salud de la población.*

*3. A los efectos indicados en los dos apartados anteriores, las personas públicas o privadas cederán a la autoridad sanitaria, cuando así se las requiera, los datos de carácter personal que resulten imprescindibles para la toma de decisiones en salud pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.*

*En cualquier caso, el acceso a las historias clínicas por razones epidemiológicas y de salud pública se someterá a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.*

En todo caso, debe igualmente tenerse en cuenta que el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 consagra el principio de finalidad en el tratamiento de datos de carácter personal, disponiendo que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”, lo que, en principio, impediría el cruce de la información obtenida en el marco de las actuaciones de inspección y evaluación o de salud pública con otros datos obtenidos de distintas fuentes o para finalidades distintas de las contempladas en las Leyes 14/2002 y 33/2011.

Fuera de todos estos supuestos, y por aplicación del artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, sería necesario que el acceso se encontrase amparado por una norma con rango de Ley, que pudiera atender a la finalidad que justificase ese acceso, tanto por los particulares como por la Administración.

## IX

Debe a continuación hacerse referencia a los datos relacionados con informaciones genéticas, respecto de las que no resulta completamente claro el objetivo planteado por las asociaciones en la documentación a la que se refiere la consulta.

En efecto, según se indica en la consulta, la demanda de las asociaciones, literalmente, es la siguiente: “solicitamos incorporarnos en la Base de Datos del Banco de ADN que dispone el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para las familias afectadas sobre la Causa de Niño Robado, o en su defecto se asiente sobre la base de un organismo o agencia nacional; Que facilite las comprobaciones de los perfiles genéticos, sin costes adicionales o divergencias de criterio de laboratorios privados. Cuya



cobertura sea tanto de ámbito nacional como internacional. Y que no estén condicionadas a lo que los jueces acrediten”, añadiendo que “si la denuncia sigue siendo el único procedimiento que tiene la familia para realizar las búsquedas, sea ésta el vehículo que permita la solicitud por derecho de la recogida de las analíticas de ADN en el propio Estado”.

De lo anteriormente señalado pudiera deducirse que la solicitud se limita a la incorporación de los datos de los propios afectados a la base de datos a la que se acaba de hacer referencia. No obstante, también parece derivarse de la misma que la pretensión se extendería a la realización de búsquedas de familiares a partir de su perfil genético.

Como ya se señaló en un lugar anterior, los datos referidos a perfiles genéticos, con independencia de la finalidad para la que los mismos sean tratados, han sido considerados expresamente por el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 como datos relacionados con la salud de las personas, por lo que el tratamiento y cesión de los mismos, en su condición de datos especialmente protegidos, únicamente sería posible cuando se contase con el consentimiento del interesado o cuando por razones de interés público así lo estableciese una norma con rango de Ley.

Por otra parte, habida cuenta de la referencia que acaba de reproducirse, los ficheros del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses relacionados con el tratamiento de datos genéticos se encuentran regulados en los apartados 98 y 99 del Anexo I de la Orden JUS/2267/2010, de 30 de julio, bajo la denominación INTCF-ADNIC (investigación criminal) y INTCF-ADNID (investigación de desaparecidos).

En cuanto al primero de los ficheros citados, la mencionada Orden dispone que su finalidad será la “Identificación y comparación genética de vestigios biológicos entre sí y con muestras de referencia de origen conocido, en investigaciones que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal”, obteniéndose los datos “de perfiles genéticos identificativos procedentes de los vestigios biológico de origen desconocido, así como los procedentes de muestras de referencia de personas imputadas en procedimientos investigados por las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal”. La propia norma añade que los datos únicamente serán objeto de cesión “a los órganos jurisdiccionales, Ministerio Fiscal, otros organismos de la Administración de Justicia en el ejercicio de sus funciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) previa autorización judicial” o transferidos a “organismos internacionales y países extranjeros en los términos establecidos en los convenios o tratados suscritos por España (Interpol, Europol, Sistema de Información Shengen, Unión Europea y convenios bilaterales o multilaterales)”.

Por lo que respecta al segundo de los ficheros, la Orden dispone que su finalidad será la “identificación genética de personas desaparecidas y



cadáveres sin identificar, en la resolución de investigaciones de jueces y tribunales”, obteniéndose los perfiles genéticos identificativos “procedentes de cadáveres y restos humanos de origen desconocido, así como los procedentes de muestras de referencia de posibles familiares y de muestras ante-mortem en procedimientos investigados por las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal”. Los datos serán igualmente cedidos “a los órganos jurisdiccionales, Ministerio Fiscal, otros organismos de la Administración de Justicia en el ejercicio de sus funciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) previa autorización judicial” y objeto de transferencia a “a los organismos internacionales y países extranjeros en los términos establecidos en los convenios o tratados suscritos por España (Interpol, Europol, Sistema de Información Shengen, Unión Europea y convenios bilaterales o multilaterales)”.

Por su parte, en cuanto a los criterios restrictivos del acceso a los datos, debe tenerse igualmente en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, cuyo artículo 7 dispone en particular lo siguiente:

*1. Los datos contenidos en la base de datos objeto de esta Ley sólo podrán utilizarse por las Unidades de Policía Judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entendiendo por tales las Unidades respectivas de la Policía y de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como por las Autoridades Judiciales y Fiscales, en la investigación de los delitos enumerados en la letra a) del apartado primero del artículo 3 de esta Ley.*

*2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el tratamiento se realizase para la identificación de cadáveres o la averiguación de personas desaparecidas, los datos incluidos en la base de datos objeto de esta Ley sólo podrán ser utilizados en la investigación para la que fueron obtenidos. 3. Podrán cederse los datos contenidos en la base de datos:*

*a) A las Autoridades Judiciales, Fiscales o Policiales de terceros países de acuerdo con lo previsto en los convenios internacionales ratificados por España y que estén vigentes.*

*b) A las Policías Autonómicas con competencia estatutaria para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad pública, que únicamente podrán utilizar los datos para la investigación de los delitos enumerados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de esta Ley o, en su caso, para la identificación de cadáveres o averiguación de personas desaparecidas.*



*c) Al Centro Nacional de Inteligencia, que podrá utilizar los datos para el cumplimiento de sus funciones relativas a la prevención de tales delitos, en la forma prevista en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.”*

Teniendo en cuenta estos antecedentes, cabe concluir que, en primer lugar, la inclusión de los datos de los interesados en las bases de datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a petición de los propios afectados sería posible en el caso de la base de datos INTCF-ADNID, por cuanto dicho fichero permite el tratamiento de datos solicitado por el interesado, contando en consecuencia con el consentimiento del mismo. No obstante, la finalidad del fichero sería la identificación de personas desaparecidas, lo que no parece coincidir con lo solicitado por las asociaciones.

En segundo lugar, teniendo en cuenta lo señalado en la norma creadora del fichero, el acceso a los datos y su cotejo con otras informaciones que aparecieran recogidas en los ficheros únicamente sería posible en los términos que la Ley legitima y que aparecen señalados en la Orden creadora del fichero, coincidentes, por otra parte con las que habilitan el acceso a las bases de datos policiales reguladas por la Ley Orgánica 10/23007, de forma que la información únicamente podría ser accesibles por las autoridades judiciales o fiscales o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando ejercieran funciones de policía judicial y previa autorización judicial, a menos que una norma con rango de Ley previese lo contrario.

## X

En cuanto a los restantes supuestos a los que se refiere la consulta no es posible, dada su amplitud dar a los mismos respuestas concretas como las que se han indicado en los apartados inmediatamente precedentes, siendo en consecuencia preciso analizar en cada supuesto concreto si concurre alguna de las causas de legitimación que se han apuntado en el apartado VI del presente informe.

En particular, cuando los datos se encontrasen incorporados a un expediente administrativo, debería tenerse particularmente en cuenta lo establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992 cuando la misma regula el derecho de acceso a archivos y registros. En relación con el alcance de dicho precepto, debe tenerse en cuenta el parecer mantenido por esta Agencia Española de Protección de Datos en el informe de 25 de octubre de 2011 emitido al entonces en tramitación “Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento común para el acceso a documentos conservados en archivos de la Administración General del Estado”, en cuyo apartado V se indicaba lo siguiente:



*“En resumidas cuentas, del estudio de la normativa a la que se ha venido haciendo referencia y de la interpretación efectuada por esta Agencia en los distintos informes que se han referido a la misma, cabría diferenciar una serie de supuestos y reglas de aplicación para el acceso a los datos contenidos en los archivos y registros regulados por el artículo 37 de la Ley 30/1992, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos accedidos, la finalidad que justifica el acceso y la antigüedad de los mencionados datos:*

- 1. Las normas de protección de datos de carácter personal no serán de aplicación en los supuestos en los que la información facilitada como consecuencia del acceso a los archivos o registros no contenga datos de carácter personal, bien por no incluirlos los documentos respecto de los que se solicita el acceso, bien al haberse producido un previo procedimiento de disociación.*
- 2. Del mismo modo, las normas de protección de datos tampoco serán aplicables a las informaciones referidas a personas fallecidas que sean objeto del acceso, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso, pudieran establecerse en las normas reguladoras del Patrimonio Histórico Español o en otras normas especiales.*
- 3. Cuando el acceso se solicite por el propio interesado cuyos datos figuren en los documentos a los que dicho acceso se refiere no existirá una cesión de datos sino una solicitud por el interesado de ejercicio del derecho de acceso, que podrá tramitarse conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, sin perjuicio de la posible existencia de disposiciones específicas reguladoras de dicho acceso cuando se trate de archivos o registros sometidos a normas especiales, tal y como dispone el artículo 25.8 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.*
- 4. El acceso a los documentos que contengan datos especialmente protegidos de los interesados distintos de quien solicita el acceso a los mismos requerirá el consentimiento del interesados, que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999 o, tratándose de datos relacionados con la salud, el origen racial o la vida sexual de los interesados, que exista una norma con rango de Ley que así lo habilite por razones de interés público.*
- 5. Del mismo modo, también sería preciso el consentimiento de los interesados cuando se trate de documentos que afecten a la intimidad de las personas, dado*



*que en caso contrario el acceso queda únicamente limitado a ellas, conforme a lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley 30/1992.*

6. *El acceso a documentos de “carácter nominativo”, que no contengan otros datos que afecten a la intimidad de las personas será posible, además de cuando el interesado haya prestado su consentimiento para ello, en los supuestos en los que el solicitante acredite la existencia de un interés legítimo y directo, tal y como dispone el artículo 37.3 de la Ley 30/1992, en conexión con el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, entendiéndose que dicho interés puede deberse a que “en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.*

7. *De la regla anterior, no obstante, quedarán exceptuados los documentos referidos a los procedimientos sancionadores.*

8. *Finalmente, se podrá autorizar el acceso directo a los documentos en los supuestos en que el investigador solicitante acredite un interés histórico, científico o cultural relevante, “siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas”. A tal efecto, deberán tenerse en cuenta las reglas establecidas en las propias normas reguladoras del derecho de acceso a archivos y registros y las que establecen el régimen del patrimonio histórico español. De este modo, el acceso sería posible:*

*a. Con las limitaciones que se han expuesto en caso de documentos con una antigüedad inferior a cincuenta años.*

*b. Sin dichas limitaciones en caso de documentos con una antigüedad superior a cincuenta años si no consta el fallecimiento del afectado o la fecha del mismo.”*

A su vez, este criterio se complementa con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, referido este precepto a la solicitud de consulta de documentos de acceso restringido por contener datos personales, y que dispone lo siguiente:

*“1. La solicitud de acceso a documentos que contengan datos personales referidos exclusivamente al propio solicitante se registrará por la normativa de protección de datos personales.*





*2. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la intimidad o a la seguridad de las personas, o que tengan la consideración de especialmente protegidos en los términos de la normativa de protección de datos personales, incluyendo los que se encuentren en procedimientos o expedientes sancionadores, será posible siempre que medie el consentimiento expreso y por escrito de los afectados.*

*No obstante, serán accesibles los documentos con datos personales que puedan afectar a la seguridad o intimidad de las personas cuando hayan transcurrido veinticinco años desde el fallecimiento de los afectados. Si este dato no constara, el interesado deberá aportar la correspondiente certificación expedida por el Registro Civil.*

*Cuando no fuera posible conocer la fecha o el hecho del fallecimiento y el documento o documentos solicitados posean una antigüedad superior a cincuenta años, el acceso se concederá si, atendidas las circunstancias del caso, se entiende razonablemente excluida la posibilidad de lesión del derecho a la intimidad personal y familiar o el riesgo para la seguridad del afectado y siempre de conformidad con la normativa de protección de datos.*

*3. El acceso a documentos que contengan datos nominativos o meramente identificativos de las personas que no afecten a su seguridad o su intimidad, será posible cuando el titular de los mismos haya fallecido o cuando el solicitante acredite la existencia de un interés legítimo en el acceso.*

*A estos efectos, se entenderá que poseen interés legítimo quienes soliciten el acceso para el ejercicio de sus derechos y los investigadores que acrediten que el acceso se produce con una finalidad histórica, científica o estadística.*

*4. Se concederá el acceso a documentos que contengan datos de carácter personal, sin necesidad de consentimiento de sus titulares, cuando se proceda previamente a la oportuna disociación de los datos, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.*

*5. La información que contenga datos de carácter personal únicamente podrá ser utilizada para las finalidades que justificaron el acceso a la misma y siempre de conformidad con la normativa de protección de datos.”*



A la vista de todo lo hasta ahora mencionado cabrá extraer las siguientes **CONCLUSIONES**:

**PRIMERA.-** El acceso a los datos a los que se refiere la consulta, tanto por los particulares, como por sus asociaciones representativas o por las propias Administraciones Públicas se encuentra sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

**SEGUNDA.-** No obstante lo anterior, deben efectuarse dos precisiones relacionadas con el ámbito de aplicación de las normas de protección de datos, de modo que los accesos producidos a tales informaciones quedan excluidos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999:

- En primer lugar, la legislación de protección de datos de carácter personal no resulta de aplicación a los datos de personas fallecidas, conforme al artículo 2.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
- En segundo lugar, no se encuentran sometidas al ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica los Libros de Bautismo de la Iglesia Católica, conforme a lo señalado por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias a partir de las de 19 de septiembre y 14 de octubre de 2008.

**TERCERA.-** Cuando la información solicitada se refiera directamente a la persona que realiza la solicitud o en cuyo nombre sea realizada la misma serán aplicables las normas reguladoras del derecho de acceso contenidas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999 y en su Reglamento de desarrollo.

**CUARTA.-** En los restantes supuestos en que no se produzca esa identidad, el acceso a los datos constituirá una cesión de los mismos que, sin perjuicio de lo ya indicado con anterioridad en relación con la no aplicación de las normas de protección de datos a las personas fallecidas, será en principio preciso que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Si se tratase de datos relacionados con la salud, como los que constan en las historias clínicas o los que se deriven de las bases de datos de perfiles de ADN, sería preciso contar con el consentimiento del interesado al que se refieran los datos o que la cesión se encontrase amparada en una norma con rango de Ley.



- En los restantes supuestos, será posible la cesión de los datos cuando la misma se encuentre amparada en el consentimiento del interesado o en los apartados a) y c) a f) del artículo 11.2 de la Ley Orgánica o, efectuada la ponderación a la que se refiere el artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE quepa concluir que el interés legítimo del solicitante ha de prevalecer sobre los derechos del afectado y, en particular sobre su derecho a la protección de datos de carácter personal.

**QUINTA.-** En cuanto al acceso a los datos contenidos en los Registros Civiles, deberá estarse a lo previsto en su normativa específica y, en particular, al principio de publicidad registral regulado por el artículo 6 de la vigente Ley del Registro Civil, de modo que el acceso se encontraría amparado por lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/199 en conexión con el artículo 6 de la vigente Ley del Registro Civil, con las excepciones al régimen de publicidad registral previstas en los artículos 21 y 22 del Reglamento de Registro Civil.

No obstante, en cuanto a la posibilidad de cotejo masivo de datos del Registro debería ser la Dirección General de los Registros y del Notariado la que resolviese sobre la procedencia de tal acceso, y en particular sobre el que pudiera ser llevado a cabo por las Administraciones Públicas al amparo de lo dispuesto en las normas citadas y en el artículo 19 del Reglamento del Registro Civil

**SEXTA.-** Por lo que respecta al acceso a los datos contenidos en historias clínicas, dicho acceso sólo sería posible en los supuestos previstos en los apartados 3 y 5 del artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, pudiendo llevarse a cabo a requerimiento judicial o por la Administración sanitaria en el ejercicio de las funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación que le competan o en los casos establecidos en el artículo 41 de la Ley 33/2001 de 4 de octubre, General de Salud Pública

**SÉPTIMA.-** En lo que concierne a las bases de datos de perfiles de ADN de las que es responsable el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, será posible la inclusión de los datos de los interesados con su previo consentimiento, si bien el acceso a los datos y su cotejo con otras informaciones que aparecieran recogidas en los ficheros únicamente sería posible que la Ley legitima y que aparecen señalados en la Orden creadora del fichero, coincidentes, por otra parte con las que habilitan el acceso a las bases de datos policiales reguladas por la Ley Orgánica 10/23007, de forma que la información únicamente podría ser accesible por las autoridades judiciales o fiscales o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando ejercieran funciones



de policía judicial y previa autorización judicial, a menos que una norma con rango de Ley pudiese prever lo contrario.

**OCTAVA.-** En los restantes supuestos, deberá analizarse la concurrencia en cada caso de causa suficiente de legitimación para la cesión de datos, siguiendo los criterios señalados en la conclusión CUARTA y, en particular, cuando se tratase del acceso a datos obrantes en expedientes administrativos o en poder de las Administraciones Públicas, a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, en los términos descritos en el apartado X de este informe, y en el artículo 28 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso